

916617

RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH N° 1419/2012
La Paz, 12 de Junio de 2012

VISTOS:

El Auto de Formulación de Cargo fecha 01 de marzo de 2011 (en adelante el **Auto de Cargo**) emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante la **ANH**), los antecedentes del procedimiento administrativo sancionador de cargo; las normas jurídicas, legales, administrativas, sectoriales, regulatorias y sus reglamentos vigentes y aplicables, y:

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico ODEC 032/2011 de fecha 17 de enero de 2011 (en adelante el **Informe**), cuyo contenido reproduce las observaciones consignadas en el Protocolo de Verificación Volumétrica en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos PVV EESS N° 004372 de 01 de enero de 2011 (en adelante el **Protocolo**), indica que producto de la verificación y el control de comercialización realizado a la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Internacional Excel S.R.L." (en adelante la **Estación**) ubicada en la Av. Dehene s/n entre calles Santa Cruz y Antofagasta de la ciudad de Oruro, se evidencio que a hrs. 13:00 p.m. la misma se encontraba comercializando gasolina especial a Bs. 6.470 el litro incumpliendo la Resolución Administrativa ANH N° 1558/2010 de fecha 31/12/2010 que fija el precio máximo final a Bs. 3.74.

Que, ante la existencia de indicios de contravención al ordenamiento jurídico regulatorio, la ANH amparada en lo dispuesto por el parágrafo I) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, formuló el cargo respectivo contra la Estación por ser presunta responsable de especular en el precio de los carburantes, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada por el inciso d) del Artículo 69 del Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos aprobado mediante Decreto Supremo No. 24721 de 23 de julio de 1997 (en adelante el **Reglamento**), modificado por el Art. 2 del Decreto Supremo N° 26821 de 25 de octubre de 2002.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo II) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, mediante diligencia de fecha 12 de abril de 2012 se notificó a la Estación con el Auto de Cargo.

Que, de conformidad con lo normado en el Artículo 78 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003 y con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y el principio del debido proceso, mediante Auto de fecha 19 de abril de 2012, la ANH dispone la Apertura del Termino Probatorio de 05 días hábiles administrativos, Auto que fue notificado a la Estación mediante cedula en fecha 10 de mayo de 2012.

Que, la Estación misma se apersonó y contestó el cargo formulado, mediante memorial presentado en fecha 26 de abril de 2012, ofreciendo prueba de descargo consistente en: **a)** Los Decretos Supremos N° 748 de 26/12/2010 y N° 759 de 31/12/2010, y **b)** Las Resoluciones Administrativas ANH N° 1515 de 26/12/2010 y ANH N° 1558 de 31/12/2010, y solicitando pronunciar resolución administrativa declarando improbadado el cargo y disponer el archivo de obrados, en virtud a los siguientes argumentos:

- a)** Que, en fecha 26/12/2010 el Presidente del estado de Bolivia promulgó el Decreto Supremo N° 748/2010, disponiendo las nuevas alícuotas del impuesto a los hidrocarburos y sus derivados, mismo que motivo que la ANH emita la RA ANH N° 1515 de 26/12/2010 por la cual dispuso los nuevos precios finales para los consumidores finales respecto a la adquisición de los combustibles líquidos.



- b) Que, en fecha 31/12/2010 el Presidente del Estado de Bolivia promulgó el Decreto Supremo N° 759/2010, abrogando los DS N° 748, N° 749, N° 750 y N° 751, estableciendo que dicha norma regirá a partir de las cero horas del día 1 de enero de 2011, mismo que motivo que la ANH en violación a los Art. 122, 123 y 164 de la Constitución Política del Estado emita el mismo 31/12/2010 la RA ANH N° 1558/2010, aplicando el Decreto Supremo N° 759 que aún no se encontraba vigente, por lo que la misma resulta nula de pleno derecho y en consecuencia no puede ser exigible a ningún regulado.
- c) Que, dicha RA ANH N° 1558/2010 no fue notificada en forma expresa a la Estación extremo que sumado al hecho de que el 1/1/2011 era un día feriado en el que sólo se encontró a personal auxiliar operando la misma.

Que, finalmente en fecha 22 de mayo de 2012 la ANH mediante el Auto correspondiente, decreta la Clausura del Término de Prueba, mismo que es notificado a la Estación en fecha 29 de mayo de 2012.

CONSIDERANDO:

Que, en cuanto al derecho vigente y aplicable que fundamenta el presente acto administrativo, el inciso a) del Art. 25 de la Ley No. 3058 de 17 de mayo de 2005, concordante con el Art. 1 y los incisos a), d), g), h) y k) del Art. 10 de la Ley No. 1600 de 28 de octubre de 1994 y con la parte in fine del Art. 2 y 5 del Reglamento, establece que la ANH cuenta con las atribuciones - entre otras-, de cumplir y hacer cumplir las normas legales sectoriales regulatorias y sus reglamentos, vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas reguladas, proteger los derechos de los consumidores, conocer y procesar las denuncias y reclamos presentados respecto a actividades bajo jurisdicción del Sistema de Regulación Sectorial y aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales.

Que, en correspondencia con el principio de sometimiento pleno a la ley que rigen los actos de la administración pública, asegurando a los administrados el debido proceso y el derecho a la defensa, la sustanciación del presente proceso se encuentra sujeta al procedimiento legalmente establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, gozando en consecuencia de plena validez legal.

Que, en aplicación de lo establecido en los Artículo 82 y 83 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, corresponde efectuar una correcta relación de los hechos expuestos y sustentados en las etapas de iniciación y tramitación del presente proceso administrativo sancionador de cargo y en consecuencia una correcta compulsión y consideración de las pruebas de cargo y descargo cursantes dentro del presente proceso administrativo sancionador, de conformidad a la regla de la sana crítica o valoración prudente y razonada de la prueba.

CONSIDERANDO:

Que, consiguientemente, en aplicación del principio de verdad material establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 23 de abril de 2002, la administración pública tiene como obligación, el de recurrir a todos los medios necesarios que permitan obtener la verdad material y objetiva de cómo acontecieron los hechos, así como, considerar y valorar toda prueba que permita profundizar la investigación, es decir, aquella que resulte totalmente vinculante a determinar la existencia o no de la infracción y que haga o infiera en el fondo del proceso, pudiendo descartar o apartarse de aquella que resulte ajena e irrelevante a lo que se pretende evidenciar.

Que, en ese sentido, el acto administrativo que resuelva el presente proceso administrativo debe considerar además de los antecedentes, los hechos facticos que se adecuan a la infracción y/o contravención administrativa, en esa línea aplicando el principio de oficialidad de la prueba, la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: *"es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, lo riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de*



las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, el momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento” (Abelaztury, Cilurzo, Curso de Procedimiento Administrativo Abeledo – Perrot, pág. 29)

Que, la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 señala en su Artículo 47 (Prueba).- “1) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.” Al respecto Agustín Gordillo en su libro Tratado de Derecho Administrativo, señala: “27) Prueba documental.- En materia de cuáles documentos habrán de ser admisibles, la regla debe formularse con la máxima amplitud y es por ello que pueden presentarse documentos públicos o privados (...)”. Pág. VI – 38.

Que, el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Tramitación Básica del Proceso Civil, páginas: 408 y 409, señala: “2) Clases de documentos públicos.- (...) los documentos más sobresalientes e importantes que son manejados en nuestra economía jurídica: (...) y en general todos documentos otorgados por funcionarios públicos, ya se trate de funcionarios del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 3) Fuerza probatoria de los documentos públicos.- (...) Los documentos públicos, se trate de escrituras públicas y otros instrumentos emanados de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, gozan de un valor probatorio pleno y erga omnes, como consecuencia de la fe pública que la ley les otorga, mientras no se pruebe lo contrario o sean impugnados en forma legal, (...)”

Que, respecto a la presunta infracción cometida por la Estación, tipificada en el inciso b) del Artículo 69 del Reglamento, modificado por el inciso b) del Art. 2 del Decreto Supremo N° 26821 de 25 de octubre de 2002, la ANH produce prueba documental consistente en el Informe y Protocolo, mismos que por la fuerza probatoria que la legislación nacional y comparada les otorga en su la calidad de documentos públicos, gozan de total validez y legitimidad por estar sometidos plenamente a la Ley, de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 y 32 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 concordante con el Artículo 48 del Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, y contra los cuales la Estación tenía la carga de probar que los hechos expresados en éstos no fueron descritos como realmente ocurrieron.

Que, bajo ese marco normativo, dentro el presente procedimiento la Estación ha gozado de un debido proceso, pues no ha tenido limitación alguna en cuanto al derecho a su defensa, contando con la posibilidad de asumir la misma a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho, que se encuentren direccionados y le permitan desvirtuar la presunta infracción por la cual se le formulo cargo.

Que, respecto a la prueba ofrecida por la Estación se debe tener en cuenta que la administración investiga la verdad material en oposición de la verdad formal, es decir se aprecia en forma objetiva, la verdad de cómo se han suscitado los hechos que se expresan en los documentos, aspecto que a momento de valorar la prueba de descargo, se evidencia que si bien la RA ANH N° 1558/2010 se publicó en fecha 31/12/2010, ello no significa que haya aplicado el Decreto Supremo N° 759 en forma previa a su vigencia y en consecuencia sea nula de pleno derecho e inaplicable a los regulados, considerando más aún que la misma RA ANH N° 1558/2010 establece en su parte resolutive Tercera que: “Los precios fijados en el artículo precedente entraran en vigencia a partir de las 00:00 horas de fecha 01 de enero de 2011”, es decir que tanto el acto administrativo como el Decreto Supremo N° 759 normaron la actividad hidrocarburifera en su campo impositivo y de precios a través de normas de aplicación futura, regla que ambas normas prevén en su contenido en forma expresa.

Que, en cumplimiento con lo determinado por el Artículo 35 del Decreto Supremo N° 24914 de 05/12/1997, la ANH a momento realizar la publicación en diverso diarios de circulación nacional de los precios pre terminales y máximos finales de los productos regulados, cumplió con su responsabilidad de poner bajo conocimiento de todo regulado y la población en general sobre la aplicabilidad de la nueva norma que determinaba los precios vigentes, por lo que la Estación no puede alegar desconocimiento, considerándose en consecuencia el resto de los argumentos



que la Estación manifiesta, irrelevantes para el análisis de fondo, el objeto y la resolución del presente caso de autos.

Que, en consecuencia la prueba de descargo ofrecida por la empresa y los argumentos que giran en torno a ella, no desvirtúa el que los hechos -tal y como se describen en el Informe y el Protocolo-, hayan ocurrido de esa manera, es decir, no demuestran que en los hechos el precio utilizado o cobrado por la Estación para la comercialización de combustibles líquidos haya sido el normativamente establecido y permitido o que lo contrario se haya debido a una caso fortuito e involuntario no atribuible a la Estación.

Que, la conclusión citada precedentemente, tiene como fuente el principio de la sana crítica, entendido ésta, como una acumulación de lógica y experiencia, por lo que la autoridad administrativa valorará la prueba a partir de su propia experiencia (considerando los hechos y el derecho) en relación a la reiteración de algunos hechos, pero también utilizando la lógica que nos permite construir ciertas decisiones y silogismos para obtener como resultado una decisión fundada precisamente en la lógica y experiencia jurídica (los hechos y el derecho).

Que, en este entendido, el Tratadista Allan R. Brewe Carias, en su obra "*La Carga de la Prueba en el Derecho Administrativo*" indica que la labor de la administración, en el procedimiento sancionador está regida por reglas diferentes a la jurisdiccional puesto que no es un juez, ni sus decisiones son jurisdiccionales menos dirime un conflicto de intereses contrapuestos, sino simplemente otorga una solicitud o sanciona una infracción, por tal motivo la administración está obligada a sancionar o no una infracción y puede fundar su decisión en razones de *hecho o de derecho* diferentes a la invocadas por las partes interesadas.

Que, de los artículos señalados precedentemente, se infiere que la Estación no sólo está obligada a cumplir las normas que se refieren a la reglamentación de sus actividades, sino también a aquellas que direccionan sus actos, en pro del resguardo a los derechos y la seguridad de los consumidores finales y el continuo abastecimiento a la población en general, más aún considerando que lo contrario implica o incide como en el presente caso de autos en una vulneración al derecho del consumidor final de que se le cobre o cancelé el precio legal por la cantidad de combustible que se le suministre, cualquiera que fuere éste.

CONSIDERANDO:

Que, de lo dispuesto los incisos b) y e) del Artículo 28 y en el párrafo l) del Artículo 51 y 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 y el párrafo l) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, se colige que todo procedimiento administrativo deberá necesariamente terminar o concluir con la emisión de una resolución administrativa dictada por el órgano administrativo competente, salvando los recursos establecidos por Ley, misma que se pronunciará en forma escrita y será fundamentada en los hechos y el derecho, decidiendo de manera expresa y precisa las cuestiones planteadas y fundamentada en cuanto a su objeto, en los hechos, las pruebas y las razones de derecho que le dan sustento.

Que, la decisión que adopte un órgano de la administración pública, debe implicar, entre otros, el cumplimiento de los principios de verdad material y oficialidad de la prueba, el respeto al principio de contradicción de las partes en el proceso, además debe ser congruente con los hechos y antecedentes que le sirven de causa y emitirse con la debida fundamentación, como una garantía contra la arbitrariedad, puesto que una resolución sin motivación priva a las partes de la facultad de fiscalizar la reflexión del juzgador.

Que, al no presentar la Estación la prueba de descargo suficiente que desvirtúe el cargo formulado, hace que la misma haya adecuado su conducta a lo previsto en el inciso d) del Artículo 69 del Reglamento, modificado por el Art. 2 del Decreto Supremo N° 26821 de 25 de octubre de 2002, correspondiendo entonces de conformidad a lo establecido en el Artículo 80 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, pronunciar resolución administrativa declarando probada la comisión de la infracción tipificada en dicha norma, debiéndose imponer al responsable (la Estación), la sanción respectiva.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del párrafo II) del Artículo 80 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, en la misma resolución que se declare probada la comisión de la infracción e imponga al responsable la sanción que corresponda, el Director Ejecutivo Interino de la ANH, ordenará también el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales infringidas.

POR TANTO:

El Director Jurídico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por delegación del Director Ejecutivo Interino mediante Resolución Administrativa ANH N° 1303/2011 de 29 de agosto de 2011 así como, de conformidad con lo señalado por el inc. b) del Artículo 80 del Decreto Supremo No. 27172 de 15 de septiembre de 2003, en nombre y representación del Estado Boliviano,

RESUELVE:

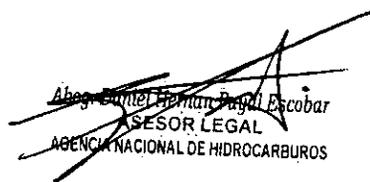
PRIMERO.- Declarar **PROBADO** el cargo formulado mediante Auto de fecha 01 de marzo de 2011, contra la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Internacional Excel S.R.L." (en adelante la **Estación**) ubicada en la Av. Dehene s/n entre calles Santa Cruz y Antofagasta de la ciudad de Oruro, por ser responsable de especular en el precio de los carburantes, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada por el inciso d) del Artículo 69 del Reglamento, modificado por el Art. 2 del Decreto Supremo N° 26821 de 25 de octubre de 2002.

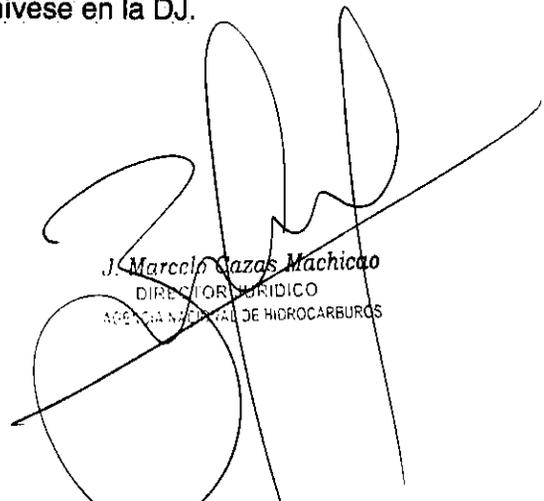
SEGUNDO.- Instruir a la Estación, la inmediata aplicación del reglamento y la obligación de comercializar combustibles líquidos en el precio normativamente permitido, para cuyo efecto deberá aplicar cada una de las normas que la ANH en su calidad de ente regulador pueda publicar en los diferentes diarios de circulación nacional, considerando su aplicabilidad temporal y vigencia de acuerdo a lo señalado en las mismas.

TERCERO.- Imponer a la Empresa, una multa de Bs. 21.537,35 (Veinte y Un Mil Quinientos Treinta y Siete 35/100 Bolivianos), equivalente a diez (10) días de comisión de ventas, calculado sobre el volumen comercializado el mes de diciembre de 2010, misma que deberá ser depositada por la Estación a favor de la ANH, en la cuenta de "ANH Multas y Sanciones" N° 10000004678162 del Banco Unión, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación con la presente Resolución, bajo apercibimiento de aplicársele lo determinado en el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 29158 de 13 de junio de 2007.

CUARTO.- La Estación deberá presentar ante la ANH el depósito bancario que evidencie el cumplimiento de la sanción impuesta, bajo apercibimiento de tenerlo por no cancelado.

Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la Estación en su domicilio procesal ubicado en la calle Socabaya esq. Mercado, edificio Torre Centro, piso 7, oficina N° 701 de la ciudad de La Paz y sea en la forma prevista por el inciso b) del Art. 13 del Decreto Supremo No. 27172, Regístrese, Comuníquese a la DE y DAF y Archívese en la DJ.


Abog. Daniel Hernán Puga Escobar
ASESOR LEGAL
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS


J. Marcelo Casas Machicao
DIRECTOR JURIDICO
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS